

Resumen ejecutivo

En los últimos años, las políticas de gobierno abierto, que incluyen las iniciativas en las áreas de transparencia, combate a la corrupción, consulta pública y gobierno digital, han mejorado sustancialmente en América Latina. Ahora la región tiene la magnífica oportunidad de consolidar este avance, mejorar el efecto general en el desarrollo social y económico, y seguir adelante con base en una estrategia más integral y orientada a resultados.

Durante las últimas dos décadas, los países de América Latina y el Caribe miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto (ALCs) han emprendido acciones para diseñar e implementar reformas del sector público y generar las condiciones organizacionales y jurídicas que les permitan ser más transparentes y eficaces, estar más sujetos a rendición de cuentas y mostrarse más sensibles a las necesidades de los ciudadanos. Se crearon instituciones para combatir la corrupción y fomentar la integridad, se aprobaron leyes de acceso a la información y se construyeron plataformas de datos abiertos.

La creación de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) en 2011 dio a los ALCs la oportunidad de sumar a sus esfuerzos el apoyo genuino de la comunidad internacional comprometida con el gobierno abierto.

En su calidad de asociado multilateral oficial de la AGA, en 2013 la OCDE comenzó a evaluar las ventajas y los retos de los ALCs en tres áreas de importancia decisiva para el gobierno abierto: estrategias de gobierno abierto y coordinación de políticas, acceso a la información del sector público y datos abiertos. La Organización también llevó a cabo tres estudios de caso pormenorizados sobre políticas y prácticas de gobierno abierto en Costa Rica, Perú y Colombia, los cuales se beneficiaron de los instrumentos analíticos y el mecanismo del proceso de revisión por pares de la OCDE.

Los países de América Latina comparten retos similares en relación con el gobierno abierto.

En toda la región el gobierno abierto sigue concibiéndose como un elemento aislado que favorece la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos y acrecienta la confianza pública. Si bien éstos son objetivos

de política pública importantes, los gobiernos de la región tienen ahora la oportunidad de ampliar su perspectiva y de reconocer y aprovechar todo el potencial del gobierno abierto como una palanca dinámica que genere valor social y económico para los sectores público y privado y para la sociedad en su conjunto. Se necesitan más estrategias integrales de gobierno abierto cuya finalidad sea extenderse a otras áreas de políticas públicas, incluso en el nivel subnacional de gobierno. Aunado a ello, sería conveniente apoyar la definición, coordinación e implementación de políticas.

Los procesos de consulta y la participación ciudadana en los ALCs se encuentran en una etapa inicial. Deberían institucionalizarse las estrategias y los procedimientos de participación y colaboración en aras de incorporar la consulta a los procesos de formulación de políticas, con lo cual se ampliarían el alcance y la representatividad de los actores consultados y se aumentaría la participación ciudadana a nivel local. Además, la aplicación y el cumplimiento de la ley se cuentan entre los principales retos de la región. Aunque los ALCs han conseguido desarrollar marcos regulatorios complejos, sus niveles de aplicación suelen ser bajos. Los ALCs se beneficiarían de una mayor claridad institucional y respaldo para asegurar la aplicación y el cumplimiento de la ley. Asimismo, la disponibilidad de órganos técnicos facultados que se encarguen de apoyar a las instituciones centrales y locales en la aplicación de políticas de gobierno abierto fortalecería sus capacidades de implementación para producir beneficios equitativamente en todos los países. La implementación efectiva y una cultura más arraigada de evaluación pueden garantizar resultados a largo plazo. En este sentido, deberían mejorarse y utilizarse más ampliamente los indicadores y la evaluación de impacto.

La mayoría de los ALCs emplean un enfoque de acceso a la información basado en la oferta. Es fundamental ampliarlo para que incorpore la perspectiva de Datos Abiertos si se desea consolidar una estrategia más orientada a la demanda y apreciar el valor de la información y los datos del sector público no sólo para lograr objetivos clave de gobernanza, tales como la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos, sino también para crear valor social y económico.

Pese a que los niveles de capacidad varían en toda la región, en su conjunto América Latina cuenta con gran conocimiento de gobierno abierto, integrado por experiencia práctica, estrategias y políticas.

Los países han seleccionado diferentes caminos y enfoques en sus esfuerzos por impulsar su agenda de gobierno abierto. Si bien la mayoría de los ALCs se han centrado en políticas de transparencia y combate a la corrupción como punto de partida, algunos han puesto mayor énfasis en la gestión efectiva de los recursos públicos o en las estrategias de gobierno digital. En la mayoría de estos países, las políticas de acceso a la información

han avanzado de manera significativa en los últimos años, junto con la adopción de marcos jurídicos para dicho acceso. Algunos países han creado sitios web y aplicaciones que fomentan la transparencia y la lucha contra la corrupción. Otros han instaurado políticas exitosas para aumentar la participación ciudadana y mejorar los mecanismos de consulta. Pocos han acogido del todo la iniciativa de Datos Abiertos.

El análisis contenido en este informe muestra que todos los ALCs obtuvieron logros significativos que pueden servir de inspiración a otros diseñadores de políticas en América Latina y diversas partes del mundo. Entre esos casos se cuenta el programa de Gobierno en Línea de Colombia, que data del año 2000 y ha hecho aportaciones sustanciales al impulso de la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno y la consulta pública. Este país ha desarrollado un marco jurídico completo y sofisticado que ha sentado las bases para numerosas y ambiciosas iniciativas de políticas. Urna de Cristal puede considerarse una iniciativa innovadora de consulta con la sociedad. En Perú, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2002 es notablemente progresista y se apega a las buenas prácticas internacionales, ya que establece un periodo máximo de siete días hábiles para proporcionar información a quien la requiera. Además, este país ha creado los Portales de Transparencia Estándar, los cuales permiten a las personas consultar información sobre actividades institucionales, presupuestos, inversiones y empleo a través de una interfaz visual amigable con el usuario. En Costa Rica, la iniciativa Conozca en qué se gasta su dinero posibilita que la población dé seguimiento al gasto público gracias a la información que brinda el sitio web de la Contraloría General, lo cual, a su vez, aumenta la participación ciudadana y el control del gasto público, al tiempo que fomenta la confianza pública.

Dadas las excelentes iniciativas que hay en toda la región, al vincular mejor las acciones de cada uno los ALCs éstos podrían compartir sus buenas prácticas y crear sinergias para afrontar los retos en común y las prioridades de políticas públicas de la región.

En el marco del Seminario Regional sobre Gobierno Abierto, celebrado en Bogotá en marzo de 2014, se ha creado una red regional de puntos focales sobre este tema. Los países identificaron las preocupaciones que tienen en común y las maneras de superarlas. Los seminarios de formación de capacidad podrían convertirse en una herramienta importante para transferir conocimiento, ya que congregan a servidores civiles, representantes de la sociedad, el sector privado y académicos de la región. Estos seminarios podrían ser instrumentos valiosos para producir un “enfoque latinoamericano” de gobierno abierto más integral y orientado a resultados.